# Modernización, globalización y neoliberalismo: reflexiones en torno al caso de México*

**Francisco Rojas Gutiérrez**
Presidente del Patronato de la UNAM

Mi agradecimiento, antes que todo, a los miembros de este Instituto Mexicanos de Contadores Públicos por la invitación a expresar algunas opiniones en el marco de esta LXXV Convención Nacional. La calidad de los participantes me obliga a considerar un honor la oportunidad que me brindan.

Observar y emitir juicios sobre la situación actual del país representa una dificultad porque obliga, en primer lugar, a abandonar muchos lugares comunes que han sustentado buena parte de nuestra interpretación de la realidad. A pesar del dinamismo de la sociedad, nos formamos en la cultura de las verdades absolutas, del maniqueísmo a ultranza; dimos por sentado lo que era bueno y lo que, sin más argumento que la inexplicable condena, constituía lo malo; concedimos los dones del patriotismo conforme a patrones que no admitían cuestionamientos y adjudicamos el estigma de la traición casi siempre en sospechoso paralelismo con la derrota.

Cambió el mundo, nuestro mundo también; no de pronto, sino paulatinamente, como corresponde a todas las mutaciones sociales; mientras se larvan pasan inadvertidas, aun cuando sus signos no se nos esconden hasta que las alteraciones cuantitativas se convierten en cualitativas y nos parece que se produce un salto; hasta que la sociedad, las instituciones y los valores se modificaron abruptamente. Fuimos parte de la transformación y no la percibimos en el momento, sino cuando a la profundidad que cobró se agregó un nuevo ritmo, una velocidad no conocida, no experimentada en nuestro tiempo.

Los viejos enfoques ya no sirvieron, las categorías analíticas quedaron inservibles, los *clichés* desaparecieron, se derrumbaron los axiomas sobre los que edificamos nuestro concepto del ser social y, por ende, pareció que el caos sustituía a la razón, al orden, a lo que inevitablemente "tenía que ser". La vorágine de la mudanza nos atrapó cuando no la esperábamos, nos envolvió y confundió, nos precipitó a profundas reformas en los momentos en que sufríamos inocultables desventajas estructurales; la coyuntura nos era totalmente desfavorable y había que afrontar rezagos que nuestra sociedad y economía han padecido ancestralmente.

La revolución científica y tecnológica empujó la globalización; el planeta se convirtió en la "aldea global"; las fronteras se flexibilizaron; el concepto clásico de soberanía pareció diluirse; los añejos

* Conferencia magistral dictada en el LXXV Convención Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en Ixtapa, Zihuatanejo, el 8 de octubre de 1998.

nacionalismos se replegaron para retoñar con agresividad y violencia que modificaron la geografía de algunas zonas de Europa, Asia y África; paradójicamente, la globalidad revivió el choque de civilizaciones y, en ocasiones, de las culturas que conformaban aquéllas.

Nosotros, haciendo honor a nuestra histórica costumbre, nos resistimos a las exigencias de una modernidad que se nos venía encima y, por lo tanto, llegamos tarde a la cita con los nuevos rumbos que los dueños de la ciencia y la tecnología (del conocimiento, del dinero) marcaban para dejar en el pasado el bipolarismo que sucumbió ante la superioridad de un modelo que, al imponerse, rompió equilibrios y arrastró a muchos países a la pérdida de lo que habían alcanzado y al desorden económico y social, derivado de la imposibilidad de reemplazar de inmediato y con ventaja el viejo orden.

Los mercados sustituyeron –en algunos países más que en otros– al Estado, que quedó en muchas situaciones debilitado para orientar en mundo de la economía y fijar las reglas del propio mercado; los panegiristas del libre mercado se olvidaron que únicamente en la regulación es posible la libertad; sin aquélla sólo se produce el desorden, el caos. Los viejos paradigmas desaparecieron cuando aun no terminamos de construir los nuevos. Sabemos qué es lo que no queremos, pero no acabamos de diseñar el nuevo proyecto de sociedad.

En México, la falta de ahorro interno y la necesidad de crecer a tasas superiores del 6% durante varios años para abatir los rezagos del empleo y absorber la mano de obra que se incorporará al mercado de trabajo, nos coloca ante la pregunta de si el mercado será capaz de lograrlo por sí solo, cuando la competitividad se sustenta sobre todo en la reducción de trabajadores; las industrias de mano de obra intensiva son cada vez menos y los trabajadores capacitados para acceder a la tecnología de punta no abundan.

Desaparecido el comunismo, ahora el adversario es el competidor. De pronto, los sistemas educativos cobran prioridad en los países industrializados y se abre más la brecha entre los países pobres y los ricos. Se tiene una mayor conciencia de la pobreza de los últimos quince años; el retiro de los gobiernos de las actividades empresariales los obligan a velar por la equidad, pero su ausencia ha multiplicado los cuestionamientos por su desempeño.

Los mercados no efectúan, como siempre se afirmó, la mejor asignación de recursos y no adoptan la responsabilidad de impulsar salud, educación, vivienda y evitar una injusta y peligrosa distribución del ingreso. Si bien actualmente la empresa privada es el sector más dinámico del crecimiento, no puede por sí sola resolver los problemas que la convivencia suscita entre los diversos sectores de la población. El hombre, al fin y al cabo, vive con pasiones y ambiciones que necesitan un cauce regulador y un freno cuando amenazan la estabilidad y la paz sociales.

En la época del tan deturpado Estado benefactor —por el que de ninguna manera abogamos—, entre 1940 y 1982, la economía mexicana creció anualmente a una tasa superior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB). En este periodo el dinamismo demográfico representó en promedio 3%, por lo que el PIB por habitante aumentó 3% al año. En esas cuatro décadas el país registró un importante progreso en la industrialización, y mejoró una parte del sector agropecuario con los distritos de riego y la aplicación de nuevas tecnologías y los consiguientes aumentos en la productividad; se amplió la infraestructura urbana, la generación de energía, las redes de transporte carretero y, paralelamente, el desarrollo del sistema financiero.

Entre 1940 y 1970 el aprovechamiento del ahorro interno se generalizó y se recurrió sólo en forma modesta al crédito externo; el empleo y el salario real se elevaron en forma constante; la inflación

entre 1951 y 1970 promedió menos del 5% anual. Posteriormente, el auge petrolero prevaleciente entre 1977 y 1981 generó expectativas irreales sobre la economía mexicana: dominó el optimismo de las autoridades respecto a la evolución de los precios del petróleo crudo en los mercados del exterior; pronto el gobierno tomó inadecuadas medidas macroeconómicas y pospuso los cambios estructurales que cada vez más necesitaba la economía. Cuando se presentó la baja de la demanda del petróleo, que había permitido mantener el ascenso del PIB, el país se encontraba endeudado, con un aparato productivo ineficiente y con una protección que había distorsionado a todos los sectores económicos. Mientras tanto en los países industrializados se impulsaba un proceso de cambio tecnológico cuya finalidad era liberarse de la dependencia de materias primas que podían costar muy caras. Su respuesta a este desafío fue un proceso de cambio tecnológico que incrementó la productividad a extremos inconcebibles.

La revolución tecnológica produce un enorme crecimiento de los movimientos de capital, de dinero que busca dinero. No existen aún fórmulas para contener, ni fronteras para limitar la libertad de movimientos de capitales, pero si bien el imperativo de la globalización es insoslayable, ello no determina las formas de adaptación nacional al nuevo orden universal. Así lo prueban las distintas respuestas que han dado los diferentes países de conformidad con su organización social y política.

Globalización y democracia pueden resultar en procesos encontrados de no mediar una acción conciliadora sistemática, deliberada. Dejar que la globalización sólo signifique la liberalización del hombre económico, limitaría y frustraría el proceso de modernización política al dejar vacíos los conceptos de ciudadanía activa, de equidad y de legitimidad del Estado. Igualdad económica e igualdad política siempre van de la mano, cuando no lo hacen pierde la democracia.

Por ello la inserción de México en el mundo global, no es óbice para reconocer la cada vez más vigorosa presencia de la democracia en la vida del país, en los órganos de representación y decisión, en las plazas públicas, en las organizaciones políticas y sociales, en los medios de comunicación, pero sobre todo en la conciencia y en la actitud de los ciudadanos. Autoritarismo y apertura se excluyen, no pueden convivir; si se suprime el debate y se reprimen las diferencias se coartan las libertades y se convierte nula la posibilidad democrática. Ante el empuje de la globalización tenemos identidades y avances que defender y consolidar; la uniformidad no nos arrastra; se requiere valor y decisión para resistir intentos de asimilar divergencias que, en último término, nos sirven para contrarrestar hegemonías.

Indudablemente el gobierno mexicano y el Partido de la Revolución Institucional (PRI) no han sido los únicos, pero sí los principales impulsores de la democratización del país; la sociedad cambió; los viejos paradigmas perecieron, por lo que es preciso construir otros que resulten del proyecto histórico de una nueva sociedad que –aunque no renuncie a sus principios fundamentales ni a sus raíces primigenias– afiance su viabilidad, reduzca rezagos ancestrales y ofrezca la tan ansiada equidad que parece alejarse cada día más. La democracia es el camino —sólo el camino— para acercar el propósito de los esfuerzos de las diversas corrientes nacionales; los intentos que partidos y poderes realizan en ese sentido, lejos de desestimarse, deben estimularse porque, cualquiera que sea la dificultad para el acuerdo, la alternativa es el autoritarismo, el afán hegemónico que elimina la tolerancia y nos acerca a la violencia.

Iniciamos un aprendizaje que no es fácil, que encara a la cultura de la descalificación y el enfrentamiento permanentes; apostamos a la eliminación del adversario; no nos damos cuenta de que la política la tenemos que hacer entre todos, cualquiera que

sea la mayoría en el Congreso o el partido que gane la Presidencia de la República. Estamos construyendo cambios a los que no podemos sustraernos, con circunstancias adversas, incertidumbres económicas y financieras, incapacidad para anticipar nuevas mutaciones que nos deparan acontecimientos fuera de nuestro control. Aun así, no se ha cedido a la tentación de detener el avance democrático, se ha propiciado una representación más genuina y se procura remover los obstáculos que a ese propósito se opongan. Los conflictos poselectorales han desaparecido de la cotidianidad política; nuevas actitudes presiden la vida de los partidos y deberemos reflejarla en las instancias de representación federal y local. Existe la convicción de que por encima de los intereses partidistas y de grupo, aun con pleno respeto a ellos, están los de la nación.

Si bien la globalización nos plantea exigencias insoslayables, la revolución tecnológica, la liberalización de los mercados y el adelgazamiento del Estado nos obligan a modernizar políticas proteccionistas que antaño —muchas de ellas— se justificaron, aunque hoy parecieran excesivas y retrógradas; la adaptación al nuevo orden debe emprenderse defendiendo nuestra identidad e intereses. La globalización no se presenta como un fenómeno uniforme para todos los países, yo diría que forzosamente estamos inmersos en ella, pero se puede establecer una diferencia si nos adaptamos a ella en los mejores términos para nuestro país, nuestra cultura e idiosincrasia.

Dentro del marco que determina el nuevo orden económico internacional tenemos márgenes de maniobra que podemos aprovechar en beneficio del país y sobre todo de las grandes mayorías; con imaginación y decisión es preciso abordar los problemas que propician la falta de un Estado cuya función reguladora se ha debilitado considerablemente y que, lejos de propiciar libertad en los mercados, auspicia anarquía y caos.

No se trata de una vuelta al pasado, pero sí de reconocer, para poner el remedio adecuado, que hasta los más recalcitrantes defensores del libre mercado reconocen que éste no puede por sí solo generar condiciones de prosperidad y justa distribución del ingreso. El darwinismo económico, que el modelo neoliberal ha impulsado hasta extremos inconcebibles hace pocas décadas, ya despierta preocupaciones en los que anatematizaron el Estado y lo redujeron —o trataron de hacerlo— a su mínima expresión. Los capitales transnacionales, sujetos a regulaciones casi inexistentes, se mueven a su capricho dejando atrás el esfuerzo de generaciones, destrozando la economía de los países que los atrajeron ofreciéndoles todas las reformas y condiciones que en su momento exigieron, frustrando la esperanza de progreso y dejando a la mayoría de los países en desarrollo, atrapados en modelos económicos y sociales ajenos a su idiosincrasia, con altos niveles de endeudamiento, monedas devaluadas, consumos drásticamente reducidos, fábricas cerradas total o parcialmente y empresas quebradas. En suma, nos hemos dado cuenta que el mercado no lo arregla todo por sí mismo; el grado de libertad que ahora se le ha conferido ha dejado, junto a los celebrados éxitos en los rubros de la macroeconomía, una estela de desgracia en la mayor parte de los países en desarrollo.

Si bien el Estado benefactor no funciona, es preciso evitar que todo el poder del Estado se traslade al mercado, a los manejadores del capital financiero, cuya movilidad impide planear y construir un modelo de desarrollo viable. El Estado está a punto de quedarse sin herramientas para conducir la vida de la población, reducido y sometido, atrapado entre la libertad de cambios y la desaparición de fronteras, entre los modelos únicos que ignoran asimetrías económicas y las profundas divergencias culturales que existen entre los pueblos. Recordemos que en 10 de los 15 países que conforman la Unión Europea, la derecha perdió el poder; ahora están

gobernados por partidos socialdemócratas o similares que han colocado otra vez al hombre como preocupación central del fenómeno económico; en tres de los cinco restantes, comparten el poder e imprimen a la obra de gobierno su sello característico.

En México, el presidente como jefe de Estado personifica la unidad, él la encarna y la ejerce; como jefe de gobierno se obliga al debate con los agentes formales e informales del poder. Su margen de maniobra está determinado por factores internos y externos. Independientemente de las presiones que se derivan de la globalización del mercado y las finanzas, del adelgazamiento del Estado y de las confusiones que existen en la relación con su partido, en el acotamiento de sus facultades —que él mismo ha propiciado o consentido— no existe otro referente para mantener el pacto social o construir otro nuevo que el presidente de la República, mejor dicho la institución presidencial.

Nuestro mundo ha cambiado, pero no somos un sistema parlamentario, por más que algunos empujen hacia esa dirección; si el constituyente permanente, en acatamiento de la voluntad de la mayoría de los mexicanos, decide que lo adoptemos, así será con todas sus ventajas y desventajas.

La unidad depende, en buena parte, de una política económica cuyos beneficios permeen a la mayor parte de la población y generen esperanzas en las grandes masas depauperadas que, en el mejor de los casos, miran hacia el norte como tabla de salvación, con todos los riesgos que esto implica.

Las crisis económicas de 1982, 1987 y 1994 han hecho recaer el peso de los ajustes en la clase trabajadora. La política de topes salariales se tornó en un ancla para contener la inflación y, aunque los salarios crecieron a una tasa inferior a la inflación interna, se indujo un margen de sobrevaluación de la moneda, lo que generó un amplio déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos cercano al 7.5% del PIB. Esta situación —aunada a los acontecimientos de Chiapas, a los asesinatos políticos de 1994 y al manejo inadecuado de la deuda interna— condujo a la crisis de diciembre de 1994.

La estrategia de modernización de la economía mexicana en los últimos quince años no ha mostrado capacidad para generar más empleos, ni para alcanzar niveles salariales adecuados. Además, pese al importante flujo de recursos externos que entran al país por las elevadas tasas de interés internas, no ha sido posible mantener la tasa de crecimiento del PIB, en comparación con la observada en el periodo de 1940 a 1982. Si bien es cierto que el sector exportador de manufacturas se ha tornado de suma importancia en nuestra balanza comercial, su crecimiento se debe, en mayor medida, a la actuación de las empresas extranjeras establecidas en México, principalmente en la industria maquiladora; en 1997 esta industria llegó a dar empleo a casi un millón de personas. Pese a todo, la estrategia económica no ha generado las condiciones que permitan reducir la desigualdad social, por el contrario ésta se ha profundizado.

Al transferir a manos privadas las funciones estatales, así como desregular y fortalecer las instituciones de mercado, consolidamos los derechos de propiedad y los de orden contractual, aunque quedan rezagadas las decisiones complementarias sobre qué limites imponer a las desigualdades que inevitablemente se derivan de la feroz competencia, que ha obligado a buena parte de las empresas –para mantenerse en el mercado– a realizar fusiones lo que contradice la libertad de mercado en que dicen sustentar la organización del nuevo orden.

El perfeccionamiento de los derechos económicos que proclamó el mundo global debe equilibrarse con la creación de derechos sociales, exigibles por los ciudadanos, que expresen la voluntad general de la lucha contra la desigualdad. Además, los cambios estructurales impulsados desde la déca-

da de los ochenta han provocado, como hemos visto, la concentración de los costos del ajuste en gran parte de la población que los ha llevado a la marginación y al desempleo; también se han ignorado los reclamos de la mayoría perdedora con la implantación del nuevo modelo económico. Hasta ahora, la desregulación y la liberación a ultranza de los mercados y las transacciones financieras han producido un marcado desequilibrio con los derechos colectivos que aseguren protección y vida digna a los grupos mayoritarios de la población.

Todas las instancias de gobierno se han referido sin ambages al riesgo de quiebra del sistema bancario, gestado años atrás, por circunstancias propias de nuestra economía, por la torpeza de algunos banqueros que no midieron riesgos, por la negligencia y deshonestidad de otros y la ausencia de un marco regulatorio que permitiera una eficiente y estrecha vigilancia de las autoridades competentes. La crisis de diciembre de 1994 detonó el problema de las carteras vencidas y puso de manifiesto la debilidad estructural del sistema bancario y, con ello, la ausencia de un elemento indispensable para impulsar el crecimiento de la economía nacional. Los cambios nos rebasaron, como en la mayoría de los campos del quehacer nacional, y nos quedamos con una nación que necesita rehacerse. El rescate bancario, que efectuó la Administración Pública, y la airada reacción que se produjo en el Congreso dan testimonio de la ausencia de mecanismos que permite que los poderes colaboren entre sí y que el país no se empantane por los caprichos o las veleidades de los actores económicos y políticos, en detrimento de la confianza interna y externa.

Prescindimos de acciones fortalecedoras de la actividad productiva. Nuestra experiencia exportadora no es muy rica y más del 95% de los establecimientos industriales o agrícolas son medianos o pequeños; no obstante, aún no se crean mecanismos que faciliten su función en las nuevas circunstancias en que vivimos (programas de reconversión, renovación tecnológica, reorganización empresarial) y que les permitan trabajar frente a la apertura internacional y a las obligaciones de los tratados de libre comercio. Se han sacrificado capacidades productivas creadas a lo largo de generaciones y roto los encadenamientos interindustriales.

Por otro lado, la salud es uno de los rubros en que se nota un adelanto digno de ser considerado; este año los servicios de este tipo cubrirán al 93% de los mexicanos. Se trata de la cobertura más alta de nuestra historia. Cada día se logran prevenir mejor las enfermedades que antes provocaban una gran cantidad de muertes, especialmente entre niños y niñas. Este rubro ha experimentado un consistente avance: de 1940 a 1997 hay un descenso espectacular de los índices de mortalidad general que descendió de 22.8 a 4.7 defunciones por mil habitantes; la mortalidad infantil se redujo de 124.5 a 17 por cada mil nacimientos, ya no muy distante en comparación con los índices de los países desarrollados. (Cabe señalar que en 1991 este índice alcanzó 8 defunciones de menores de un año en países europeos como Alemania y España). Todo esto se ha conjugado para tener una mayor esperanza de vida, que ascendió de 41.5 a 72.5 años entre 1940 y 1997.

En materia educativa también ha habido importantes avances. Se ha elevado la cobertura de la educación: 28.5 millones de alumnos están asistiendo a clases en 210 mil escuelas en todos los niveles; las cifras en materia de avance educativo son realmente plausibles y hablan de la preocupación por el tema y de una buena coordinación entre el magisterio y el gobierno en todos sus niveles, aun cuando los recursos que se le destina están muy lejos de ser los adecuados.

Pero salud y educación no pueden por sí solos cubrir todos los aspectos de una política social integral; si bien hay adelantos y esfuerzos dignos

de encomio, se nota la ausencia de una política social que articule los esfuerzos en esta materia, les otorgue congruencia y permita crear una sinergia que multiplique resultados y comprometa a todos los sectores de la población en su planeación y realización. El número de pobres aumenta, la seguridad pública —razón de ser del Estado— no mejora, a pesar de los esfuerzos para combatir y prevenir la delincuencia.

Los ciudadanos reclaman mayor seguridad jurídica frente a los actos de la administración; acabar con la impunidad; mejorar la impartición de justicia; un régimen tributario más equitativo; seguridad en su trabajo; salarios remuneradores; acceso a libros, revistas, periódicos, transportes públicos dignos; acabar con la discriminación de grupos minoritarios y de las mujeres; disfrutar más sus plazas, jardines, museos; sentir que la patria es suya y de sus hijos. En suma, necesitan recuperar la esperanza, la alegría de vivir, la credibilidad en sus gobernantes, en sus partidos políticos, en sus vecinos, en sus maestros, en sus guías religiosos, en sus valores —nuevos y tradicionales—. Requieren estar seguros, que saldrán adelante porque la sociedad, a través de la historia, siempre ha sabido resolver los problemas que los grandes cambios le han planteado.

Seremos capaces de seguir existiendo como nación, soñar que alcanzamos la justicia social o que siquiera nos acercamos a ella. Nuestra historia ha sido siempre la lucha del viejo orden contra el nuevo que, por lo regular, ha sido excluyente, salvo el de la Revolución Mexicana. Hemos superado los problemas que los proyectos de nación empujados por las élites han generado; seguramente nos impondremos a este nuevo reto si consideramos que los países campeones del proyecto neoliberal ya vienen de regreso; para ellos también significó desempleo, aumento de la pobreza, entrega del poder del Estado a las grandes transnacionales, pérdida de los instrumentos de conducción del desarrollo.

Pongamos otra vez al hombre en el centro de la preocupación de la economía. Coloquémoslo por encima de las cifras. Derrumbemos el monumento a los números y estadísticas; pongámoslos al servicio del bienestar humano. La economía no es un fin en sí misma, ni está por encima de la política; hagamos de ésta la rectora de la actividad de la comunidad para alcanzar bienestar, vida digna y estabilidad para todos los mexicanos.